

**OPINION DE LA
ASOCIACION ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES
SOBRE LOS TRIBUNALES FISCALES.**

Vistas las presentaciones efectuadas por el Dr. Héctor B. Villegas con relación al Tribunal Fiscal de la Ciudad de Córdoba, y de los Dres. Juan Oklander y Ernesto Grun referida al Tribunal Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, las cuales solicitan opinión de esta Asociación acerca de la situación existente con referencia a ambos.

Considerando

1. Esta Asociación ha adherido jubilosamente a la celebración del vigésimo aniversario de la creación, por ley 15.265 de fecha 29 de diciembre de 1959, del H. Tribunal Fiscal de la Nación.

2. Tal adhesión, de ninguna manera se ha limitado a la mera constatación del tiempo transcurrido. Por el contrario, ha importado un compromiso de nuestra institución con los fines que inspiraron la creación del Tribunal, con la rapidez y el acierto de su implementación práctica, con la significación de su presencia en el contradictorio tributario, y especialmente con una trayectoria que es la razón fundamental de su consolidación, y que permitirá el perfeccionamiento de ese ente jurisdiccional.

3. Esta referencia de los dos puntos que anteceden se justifica, precisamente porque la experiencia recogida del Tribunal Fiscal de la Nación aparece contradicha por lo ocurrido con los Tribunales Fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, posiblemente las dos más significativas metrópolis de nuestro país que, habiendo contado con ellos en las normas, continúan sin contar con ellos en los hechos.

4. El Tribunal Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, fue creado por la Ley Orgánica Municipal Nº 19.987 (arts. 67 a 84) sancionada en 1972. Once años después, en las postrimerías del gobierno de facto, por Ordenanza Nº 38.957 del 11 de mayo de 1983, se reglamentó con precisión el Tribunal Fiscal creado por la ley, llegando a dictarse en el mismo cuerpo las normas de procedimiento. Sin embargo, a pesar del largo tiempo transcurrido desde ambos acontecimientos, el Tribunal Fiscal Municipal siguen sin funcionar, y continúa por tanto, siendo una aspiración insatisfecha para los contribuyentes y también para el fisco de esta ciudad de Buenos Aires.

5. Algo similar ha ocurrido en la ciudad de Córdoba con su Tribunal Fiscal Municipal. Fue creado por Ordenanza Nº 7274 de fecha 2 de febrero de 1981

dictada con el antecedente del Decreto Nº 11.102/80 y de la Resolución Nº 717/80 del Ministerio de Gobierno ambos de esa Provincia, mediante una muy precisa regulación que fue incorporada al texto del Código Fiscal como arts. 92 a 119 pro Decreto 502-C/84. No obstante ello, y sin contradecir ni aludir siquiera a las razones invocadas como fundamento de su creación, este Tribunal Fiscal Municipal nunca implementado en los hechos ha sido aniquilado por una decisión política de efectos derogatorios: por Ordenanza Nº 8146 de este año 1986 se reemplazan los artículos del Código Fiscal que creaban, implementaban y reglamentaban el Tribunal Fiscal, por otros que solo otorgaban los recursos administrativos de reconsideración y apelación, ante el propio Departamento Ejecutivo.

6. Las circunstancias consignadas en los dos puntos que anteceden, importan una evidente contradicción y motivan de parte de esta Asociación una actitud estrictamente inversa a la apuntada en los dos primeros. Es de lamentar que las autoridades de estas dos importantes ciudades no hayan abrevado en la experiencia de la Nación y de la mayoría de las provincias argentinas, y frustren -una por omisión, la otra por acción- lo que constituye una necesidad del contradictorio tributario sustantivo independiente, un anhelo explícito de la doctrina unánime, un derecho de los sujetos de la obligación impositiva, y un imperativo económico, jurídico y moral de nuestra entidad.

Por ello, dentro de sus atribuciones estatutarias y ante el pedido expreso de tres distinguidos miembros activos, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales les hace saber que considera que la circunstancia de que el Congreso Nacional haya ratificado por Ley Nº 23.054 el "Pacto de San José de Costa Rica" (Convención sobre Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969), torna propicia la oportunidad para insistir sobre la conveniencia de implementar sin dilaciones estos dos Tribunales Fiscales Municipales, atendiendo precisamente a las razones que invocaron las propias normas de su oportuna creación.

Así porque el art. 8º del Pacto ahora ratificado y por tanto convertido en ley nacional dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o un Tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral y fiscal o de cualquier otro carácter".

Buenos Aires, noviembre de 1986

**Enrique L. Scalone
Secretario**

**Rubén O. Asorey
Presidente**